

ACCIÓN URGENTE

DETENIDO EL PLAN DE DESALOJO DE ROMANÍES

Tras las protestas por parte de organizaciones de derechos humanos y embajadas extranjeras, el plan de desalojo forzoso de la población romaní de Baia Mare, Rumania, previsto para el 5 de septiembre, parece haberse detenido.

El 23 de agosto, el alcalde de Baia Mare, en el noroeste de Rumanía, anunció un plan para desalojar de cuatro zonas de la ciudad a "cientos" de romaníes y otras personas desfavorecidas socialmente que no tuviesen documentos de identidad inscritos en Baia Mare, y expulsarlos a sus lugares de origen. Los medios de comunicación locales habían informado de que los desalojos comenzarían el 5 de septiembre. Las declaraciones del alcalde de Baia Mare suscitaron reacciones por parte de Amnistía Internacional y de las organizaciones no gubernamentales romaníes CRISS, con sede en Bucarest, y Şanse Egale, con sede en Zalau, y provocó la movilización de miles de activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo para pedir a las autoridades locales y al gobierno de Rumania que detuviesen los desalojos forzosos. También hubo una fuerte reacción por parte de la embajada de EE. UU. en Bucarest, que emitió un comunicado el 31 de agosto en el que se decía: "Respaldamos las opiniones expresadas por Amnistía Internacional y otras personas, que dijeron que estos desalojos y demoliciones no deberían llevarse a cabo. El embajador Gitenstein confía en que el alcalde Chereches intentará encontrar la forma de mejorar las condiciones de alojamiento de todos los habitantes de Baia Mare, y de respetar, al mismo tiempo, los derechos de todas las personas". El embajador de EE. UU. en Bucarest, según informes, acudirá a Baia Mare el 19 de septiembre para reunirse con las autoridades locales y visitar a las comunidades romaníes afectadas.

El 13 de septiembre, el diario *Adevărul de seară* informó de que un comité de trabajo del Ministerio de Administración Pública e Interior, y del Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social visitó Baia Mare con el fin de debatir sobre las posibles soluciones para resolver la situación de las comunidades romaníes y para ofrecer su ayuda a las autoridades de la ciudad y del condado de Maramureş. Según el informe de prensa, la delegación visitó a las comunidades romaníes afectadas para recabar información y atender las preocupaciones manifestadas por la comisaria europea de Justicia y Asuntos Internos, Viviane Reding, y por Amnistía Internacional. De acuerdo con el informe, el alcalde presentó un proyecto piloto para la integración de la población romaní en Baia Mare y afirmó: "Existen tres opciones de construcción (módulos, ladrillo u hormigón). Se edificarán aproximadamente 400 viviendas en tres hectáreas de terreno, y estarán equipadas con todos los servicios necesarios (electricidad, agua y gas). El ayuntamiento proporcionará transporte a los niños y niñas romaníes para que puedan asistir a las guarderías y escuelas de Baia Mare".

En una carta de respuesta a los activistas de Amnistía Internacional, del 6 de septiembre, el alcalde de Baia Mare prometió que mientras se abordaba el asunto de los asentamientos informales, las autoridades locales respetarían las leyes nacionales y las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las autoridades de la ciudad todavía tienen pendiente comprometerse públicamente, y de forma explícita y clara, a que no se llevará a cabo ningún desalojo a menos que se hayan puesto en marcha todas las salvaguardias necesarias, o hasta que sea posible aplicarlas. Por lo que Amnistía Internacional ha podido saber, dos semanas después de la fecha prevista para el desalojo, aún no se ha desahuciado a ninguna persona ni a ninguna familia, y tampoco se han demolido viviendas.

A pesar de la satisfacción de Amnistía Internacional por el retraso en los desalojos forzosos previstos, la organización cree que las autoridades locales todavía pretenden eliminar los asentamientos existentes en varias zonas de Baia Mare. Amnistía Internacional seguirá supervisando la situación con el fin de garantizar que cualquier desalojo que se realice se llevará a cabo como último recurso y en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.

No se requieren más acciones por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes participaron en esta acción.

Esta es la primera actualización de AU 252/11. Más información en: <http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR39/007/2011/es>

Nombre: Comunidades en Craica, Ferneziu, Horea, Pirita y Valea Borcutului
Género h/m: Ambos

Más información sobre AU: 259/11 Índice: EUR 39/009/2011 Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2011

**AMNISTÍA
INTERNACIONAL**

